

POLICY BRIEF

MERCADO DE TIERRAS E ILEGALIDADES: LAS PROFUNDAS RAÍCES DE LA DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA

Francisco de Assis Costa*, Carlos Larrea*, Roberto Araújo, José Heder Benatti, Vanesa Giraldo, Susanna Hecht, María Rosa Murrís, Stefan Peters, Marianne Schmink, Emiliano Terán, Jeronimo Treccani | *Co-autores principales

MENSAJES CLAVE

(i) En un contexto de débil presencia estatal y deterioro de la democracia, la apropiación ilegal de tierras avanzó en Brasil, Colombia, Bolivia y Perú, mientras que el narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otras actividades ilícitas también proliferaron, especialmente en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

(ii) Las raíces profundas de la deforestación se encuentran en la forma en que los patrones concentrados de propiedad de la tierra en los países de la Amazonía han ido aprisionando los bosques amazónicos y, en contextos institucionales de caos de tierras, hace que su destino esté sujeto a los criterios del mercado de tierras. El deterioro de la democracia refuerza este movimiento.

(iii) El mercado de tierras en países amazónicos como Brasil y Colombia forma parte de todo un ecosistema de ilegalidades en torno a la apropiación y transformación de tierras públicas (boscosas) en privadas (deforestadas). En la Amazonía brasileña, en 2017 nada menos que 31 millones de hectáreas (un área del tamaño de Italia) de bosques estaban bajo el control

de los mayores establecimientos privados, presumiblemente sometidos al impulso de la creciente rentabilidad tendencial en la producción y especulación con las tierras.

(iv) El área de cultivo de coca se cuadruplicó entre 2010 y 2022 en Colombia, principalmente en la frontera con Ecuador, lo que ha llevado a una quintuplicación de las tasas de homicidio en Ecuador y ha puesto de manifiesto el fracaso de las políticas antidrogas convencionales en toda la región andina.

(v) En Venezuela, el ecosistema de crímenes que impacta fuertemente a la Amazonía y su gente se organiza alrededor de la minería ilegal de oro en un contexto político de indiferencia y oscuridad institucional. Una dramática expansión de la minería ilegal de oro también está teniendo lugar en Bolivia y Perú, donde el oro se ha convertido en uno de los principales productos de exportación.

(vi) La región amazónica registra una gran parte de los casi 2,000 defensores del medio ambiente y del territorio asesinados en todo el mundo entre 2012 y 2022, siendo Colombia y Brasil las zonas más violentas.

RECOMENDACIONES

(i) Para hacer frente a los cimientos del mercado de tierras alentado por el caos de tierras, se debe dotar a los gobiernos y a la sociedad civil de recursos informativos (tanto infraestructura de procesamiento como información organizada), para reconstituir las cadenas de propiedad de forma rápida y barata y sacar a la luz sus incoherencias. Esto los empoderará para superar el caos de tierras, garantizando al mismo tiempo su capacidad para distinguir entre transacciones legales e ilegales relacionadas con la tierra.

Con ello se lograrán las siguientes tareas clave:

- Permitir al Estado controlar las tierras públicas y devolver al control público las tierras privadas adquiridas ilegalmente.
- Ampliar las políticas de mando y control, anticipando y combatiendo las ilegalidades que subyacen y fortalecen el mercado de tierras.
- Reforzar la democracia garantizando la transparencia social en la gestión de sus bases más valiosas.

(ii) Contener otras ilegalidades, promover la gobernanza nacional e internacional orientada a la Amazonía, incluyendo:

- Mejorar los sistemas (inter)nacionales de verificación del origen de posibles bienes de procedencia ilegal, como el oro, la madera y la soja, que se introducen en las cadenas de valor legales, integrados en marcos internacionales que penalizan los bienes asociados a la degradación medioambiental, la deforestación

y las prácticas territoriales ilegítimas.

- Fortalecer la implementación del Pacto de Leticia y la Declaración de Belém, poniendo en práctica de manera coordinada mecanismos regionales de gobernanza y políticas de conservación, incluyendo el monitoreo de las políticas estatales amazónicas con el objetivo de eliminar las prácticas corruptas e ilegítimas y la impunidad estatal que conducen a la apropiación de tierras, la minería ilegal, la tala y el narcotráfico. Impulsar enfoques conjuntos en los que participen los gobiernos de Colombia, Brasil, Guyana y Venezuela para abordar la minería ilegal, incluyendo problemas transfronterizos.
- Considerar políticas alternativas y complementarias para combatir el tráfico ilegal de drogas, incluyendo no sólo la erradicación de la oferta por la fuerza sino también el control de la demanda internacional, dada la baja efectividad y los pobres resultados de las estrategias convencionales en los países amazónicos.

(iii) El mercado de tierras, y todo su ecosistema de ilegalidades, impone presiones abrumadoras sobre los modos de producción y de vida vulnerables. Por lo tanto, es necesario:

- Fortalecer las economías de las comunidades locales, campesinas e Indígenas.
- Fortalecer la cohesión social de las organizaciones campesinas, de base e Indígenas, y defender los derechos humanos de los líderes sociales.

A. DETERIORO DE LA DEMOCRACIA Y DEL ESTADO DE DERECHO

En la última década, la pérdida de bosque primario se duplicó en la Amazonía, aumentando fuertemente en todos los países (Figura 1A). El proceso ha

sido especialmente grave en Brasil, Bolivia, Perú y Colombia^{1,2}. La conversión subsiguiente en tierras de cultivo se ha concentrado en grandes propiedades y ha tenido lugar sobre todo mediante una combinación de medios legales e ilegales, especialmente en Brasil y Colombia³⁻⁵.

Mercado de tierras e ilegalidades: Las profundas raíces de la deforestación en la Amazonía

El mercado de tierras en la Amazonía es una estructura poderosa que precede, condiciona e interfiere críticamente en las decisiones productivas. La demanda del mercado de tierras deforestadas producidas impulsa el acaparamiento ilegal de tierras y el "caos territorial"

Monitorear las políticas estatales de la Amazonía para erradicar la corrupción y la impunidad y aumentar los esfuerzos humanitarios internacionales centrados en la región amazónica

Reforzar la democracia garantizando la transparencia social en la gestión de sus bases más valiosas

A escala nacional, ampliar las políticas de mando y control para impedir las ilegalidades en el mercado de tierras. A escala internacional, mejorar los sistemas de verificación del origen de los productos potencialmente de procedencia ilegal



Ampliar las zonas protegidas y reconocer las Tierras Indígenas, reforzando al mismo tiempo el control contra las actividades extractivas ilegales



Detener el monocultivo comercial a gran escala y las explotaciones intensivas en capital cerrando la frontera agraria, mientras se promueve el empleo sostenible, el turismo y los sistemas productivos orientados al mercado locales.



Fomentar la participación de las comunidades locales y su integración en los sistemas nacionales de gobernanza, proporcionando al mismo tiempo apoyo técnico y acceso a los mercados para reforzar la resiliencia de las asociaciones locales y de las economías indígenas y rurales



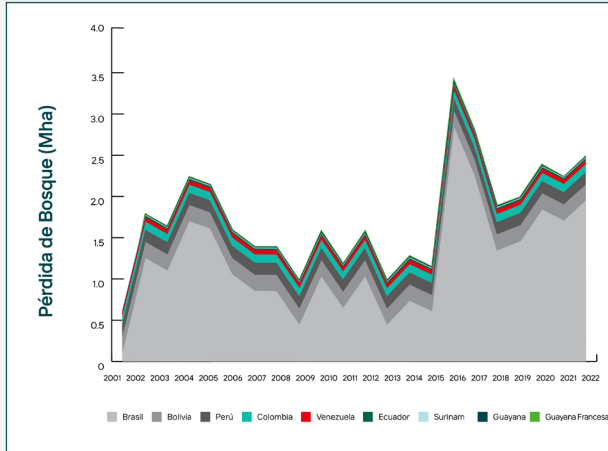
RESUMEN GRÁFICO: Mercado de tierras e ilegalidades: Las profundas raíces de la deforestación en la Amazonía.

Al mismo tiempo, otras actividades ilegales aumentaron en la Amazonía. Entre 2010 y 2022, la superficie de cultivo de coca se cuadruplicó en Colombia (Figura 1-B), el mayor productor de cocaína del mundo⁶, y la minería ilegal de oro se expandió drásticamente en Venezuela, Bolivia, Perú y otros países de la Amazonía² (Figura 1-C). En un contexto de débil presencia estatal y decadencia de las instituciones democráticas, proliferó la violencia

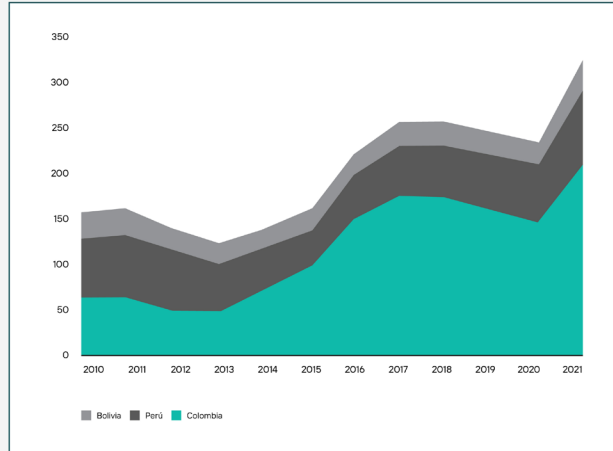
y surgió una compleja red mundial de actividades legales e ilegales, así como de blanqueo de dinero.

Evidencias recientes muestran correlaciones dramáticas entre el deterioro de la democracia en los países amazónicos^{7,8} y el aumento de actividades ilegales y amenazas al bioma y a las poblaciones y culturas asociadas a él. Después de tres décadas de avances oscilantes pero continuos en la calidad de

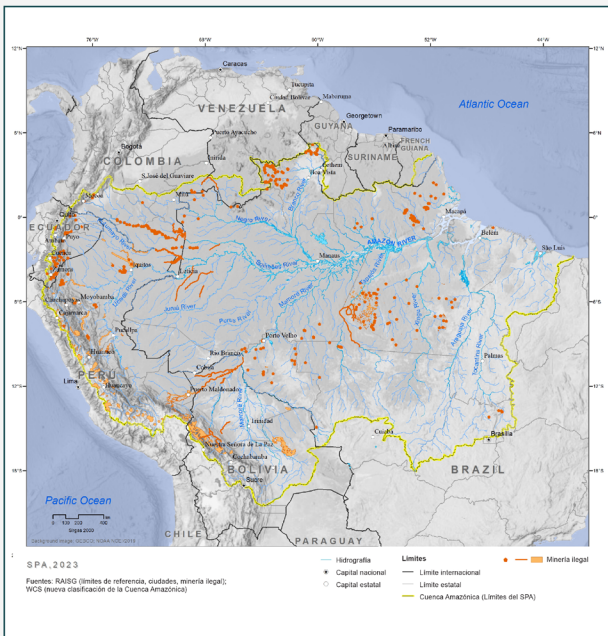
A Pérdida de cubierta forestal primaria por país (2001-2022)



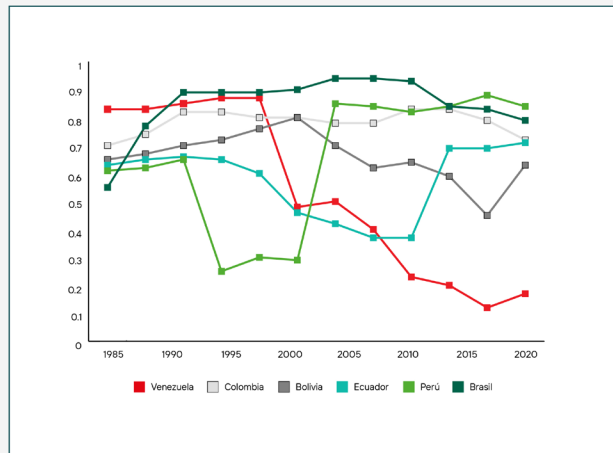
B Cultivo de coca por país (2010-2021)



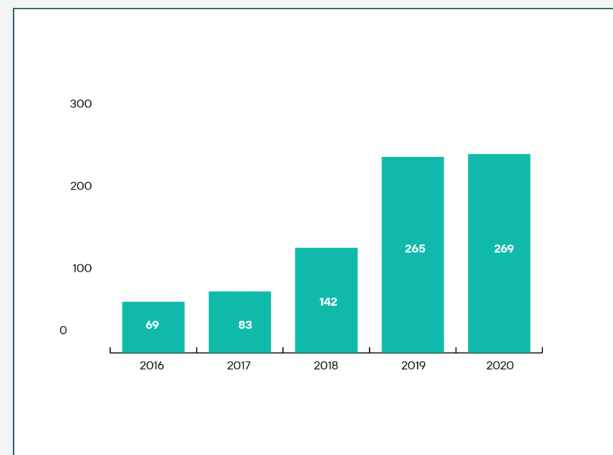
C Mapa de la minería ilegal de oro



D Índice de control civil de la democracia (1985-2020)



E Apropiación de tierras públicas (miles de hectáreas)



Fuentes: A: Global Forest Watch; B: ONUDD;
 C: RAISG (2020) Amazonía bajo presión;
 D: Universidad de Würzburg; E: Rede Amazônica de Informação Socioambiental.

FIGURA 1. (A) Pérdida de cobertura forestal primaria por país (2001-2022). (B) Cultivo de coca por país (2010-2021). (C) Mapa de la minería ilegal de oro. (D) Índice de control civil de la democracia (1985-2020). (E) Apropiación de tierras públicas en Brasil (miles de hectáreas). Fuentes: A: Global Forest Watch; B: ONUDD; C: RAISG (2020) Amazonía bajo presión; D: Universidad de Würzburg; E: Rede Amazônica de Informação Socioambiental.

la democracia -excepto Venezuela-, de 2016 a 2020, hubo retrocesos significativos en Brasil, Bolivia y Colombia, y una continuidad de la situación de grave deterioro en Venezuela, (Figura 1D). Los datos de Perú y Ecuador en la Figura 1-D muestran una relativa estabilidad, pero no reflejan los acontecimientos del último año, cuando estos países sufrieron dramáticas crisis políticas e institucionales, que condujeron a la violencia política y al deterioro del estado de derecho y la separación de poderes. Esta crisis regional de la democracia fue acompañada por el notable crecimiento de las actividades ilegales, incluyendo aumentos extraordinarios en la apropiación de tierras públicas (en Brasil, las ocurrencias verificadas de deforestación anual en tierras públicas se triplicaron en el período, Figura 1-E); expansión de la minería prohibida (la Rede Amazônica de Informação Socioambiental registró 4.472 localidades, principalmente en Brasil y Venezuela, pero también en Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú y Surinam)²; y la extraordinaria duplicación del área de plantación de coca en Colombia, Bolivia y Perú (Figura 1-B).

Colombia concentra cerca de dos tercios de la superficie cultivada de coca en América Latina^{6,9}. Entre 2010 y 2022, creció de 62.000 ha a 240.000 ha, fuertemente concentrada en la frontera ecuatoriana, incluida la cuenca del Putumayo en la Amazonía⁶. Ecuador se convirtió en una importante ruta de tráfico de drogas, y su tasa de homicidios se quintuplicó entre 2018 y 2022, ya que el país se convirtió en uno de los más violentos de América Latina. El asesinato del candidato presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio en agosto de 2023 ejemplifica la crisis¹⁰.

La intensidad y escala de estos cambios revela la significativa reorientación o incluso el desmantelamiento de las capacidades operativas del Estado en la región en este corto período. Poderosas fuerzas subyacentes plantean importantes desafíos a las democracias amazónicas, así como a los modos de vida

de sus sociedades y a su base de recursos naturales. Los Estados amazónicos albergan históricas “coaliciones de pillaje”^{11,12}, que articulan los intereses territoriales con la producción insostenible de productos agrícolas y minerales tradicionales. Estas coaliciones influyen en el comportamiento inestable del Estado en diversos grados, dependiendo de la potencia de fuerzas opuestas asociadas a nuevas “coaliciones pro-ambientales”, complejas redes de actores sociales que se han formado recientemente en torno a principios de sostenibilidad social y medioambiental.

Este documento se centra en la naturaleza estructural de las interacciones entre las dimensiones legales e ilegales del mercado de tierras y otras actividades ilegales, como el tráfico de cocaína y la extracción de oro. Para ello, se describen con más detalle tres casos nacionales (en Brasil, Colombia y Venezuela) y también se hacen breves referencias a las actividades ilegales en Perú y Bolivia.

B. BRASIL: LA “COALICIÓN DE PILLAJE” PERMITE ACUMULACIÓN DE TIERRAS PRIVADAS Y DEFORESTACIÓN A GRAN ESCALA

1. LA PRIVATIZACIÓN DE LOS BOSQUES PÚBLICOS ES EL GÉNESIS DEL MERCADO DE TIERRAS DEFORESTADAS Y DEL CONTROL PRIVADO DE LOS BOSQUES EN LA AMAZONÍA BRASILEÑA

La privatización implica cercar los bosques públicos, transformándolos en bosques privados (o tierras boscosas, FL, en la jerga del mercado de tierras), seguido de la deforestación para transformarlos en tierras deforestadas (DL, por sus siglas en inglés), el objeto central del mercado de tierras. Este proceso se ha visto influido por diferentes políticas del gobierno brasileño, y el

ritmo de privatización ha variado con el tiempo¹³. La Figura 2-A muestra las tendencias a lo largo del tiempo: del total de 51.3 millones de hectáreas de tierras declaradas como propiedades privadas en el censo agropecuario de 1970, 48.8 millones (95%) se encontraban deforestadas en 1985. De 1985 a 2006, la contención del proceso de privatización fue acompañada por la deforestación de otros 19 millones de hectáreas, reduciendo el acervo de bosques privatizados a 49 millones de hectáreas. Luego, de 2006 a 2017, la superficie de tierras privadas siguió aumentando (hasta 132 millones de ha), y el 58% de esas tierras fueron deforestadas. Si el ritmo de privatización y deforestación se mantuviera igual, se puede estimar que la superficie total de tierras privadas aumentó a poco más de 139 millones de hectáreas en 2022, de las cuales cerca de 81 millones (19.2% del bosque amazónico brasileño) fueron deforestadas (Figura 2-A). Los

datos del PRODES muestran una cifra ligeramente superior, de 83.1 millones de hectáreas deforestadas hasta julio de 2022 para la Amazonía brasileña (19.7% del total).

La privatización de los bosques públicos amazónicos brasileños y la producción de tierras deforestadas son operaciones a gran escala y predominantemente ilegales

Las apropiaciones de grandes extensiones de tierra han dominado la privatización de la tierra en la Amazonía brasileña, concentrando aún más la propiedad de la tierra: las grandes propiedades (La) de más de 1,000 ha poseían el 59% del total de tierras privatizadas en 1970 y el 61% en 2017 (Figura 2-B), lo que lleva a un Índice de Gini medio de 0.827 en la región, muy superior al del resto de Brasil, de 0.801¹³.



FIGURA 2. Privatización de tierras públicas y mercado de tierras en la Amazonía brasileña. A) Evolución histórica del stock de tierras en establecimientos privados; estructura por tamaño [Sm (Pequeña <100 ha); Me (Mediana 100 a 1,000 ha); La (Grande > 1,000 ha)] y cobertura forestal/no forestal: FL (Tierras boscosas, por su sigla en inglés) y DL (Tierras deforestadas, por su sigla en inglés) (en millones de ha); B) Participación de establecimientos por debajo (BL) y por encima (AL) del límite de tamaño legal para la apropiación de tierras públicas entre 2006 y 2017, considerando cobertura de tierras boscosas y deforestadas (en millones de ha); C) Diferencias de precios entre tierras deforestadas y boscosas (en R\$1,000/ha); D) Incremento anual del total de tierras privatizadas, de la producción-oferta de tierras deforestadas (deforestación según PRODES) y de la demanda anual de estas tierras por la economía, 1985-2020 (millones de ha)³. Fuente: datos de tierras IBGE¹⁶; datos de precios IFNP; IHS Markit.

La alta concentración de tierras, a su vez, está asociada a procesos de posesión presuntamente ilegales. En concreto, en la expansión de la tierra privada durante el último período, los establecimientos mayores de 2,500 hectáreas (es decir, por encima del límite constitucional para la asignación de tierras públicas), se apropiaron de 9.5 millones de hectáreas - el 62,5% de la apropiación total de 15.2 millones de hectáreas (Figura 2-B) - y en 2017 poseían 61 millones de hectáreas, la mitad en propiedades gigantes mayores de 10,000 hectáreas (en la Figura 2-A, AL+).

La concentración de la propiedad de la tierra corresponde a la concentración de las reservas forestales: después de deforestar 5.2 millones de hectáreas de activos adicionales de 2006 a 2017, los establecimientos de más de 2,500 hectáreas (AL) añadieron 4.3 millones de hectáreas a sus reservas forestales (Figura 1-B), que aumentaron a 31 millones de hectáreas. También es destacable que, de este total, 17 millones de hectáreas se declararon en establecimientos de más de 10,000 hectáreas (Figura 1-B, AL+).

El destino social y medioambiental de la Amazonía brasileña depende crucialmente de lo que ocurra con estas inmensas reservas forestales bajo diversas formas de control privado. Se puede evaluar el peso de los problemas y los riesgos que entraña, considerando que la deforestación de aproximadamente 12 millones de hectáreas más, llevaría a la Amazonía al límite máximo de deforestación (20% de la cubierta forestal eliminada) que, según los modelos, empujaría a la Amazonía hacia el punto de no retorno^{14,15}.

2. LA DEMANDA DE TIERRAS DESMONTADAS PRODUCIDAS IMPULSA EL APROPIAMIENTO ILEGAL DE TIERRAS Y EL "CAOS DE TIERRA"

El mercado de tierras en la Amazonía es una poderosa estructura que precede, condiciona e

interfiere críticamente en decisiones productivas (con énfasis en la presión sobre el bosque y la deforestación). A diferencia del mercado de tierras rurales en el resto de Brasil, donde el volumen de la propiedad de la tierra en juego se redujo de 243 millones de hectáreas en 1970 a 218 millones en 2017¹⁶, en la Amazonía se caracteriza por una oferta que incorpora la "producción" anual de tierras desmontadas. Esta producción se rige por las ganancias específicas del mercado de tierras, o la diferencia entre los precios de la tierra con y sin bosque (considerando que, a grandes rasgos, el coste y los ingresos de la deforestación son equivalentes, Figura 2-C). A su vez, la demanda de tierras deforestadas viene definida por la evolución de los mercados de productos y por las tecnologías adoptadas en los respectivos sistemas de producción. Así, la oferta y la demanda de tierras evolucionan con gran autonomía relativa³.

Las condiciones institucionales permitieron la privatización a gran escala de los bosques públicos mediante el apropiamiento ilegal de tierras, que tiene costes mínimos y conduce a una situación de "caos de tierras" (Recuadro 1). Esto apuntaló el mercado de tierras al mantener los precios de las tierras boscosas creciendo más lentamente que los precios de las tierras sin bosque, respectivamente un 4.2% y un 5.7% al año, aumentando en consecuencia el margen de beneficio absoluto de la conversión de tierras desmontadas a un ritmo medio del 6.2% anual entre 2001 y 2020 (Figura 2-C). Al mismo tiempo, el bajo coste de creación y mantenimiento de las tierras deforestadas provocó el crecimiento de las reservas especulativas de tierras deforestadas. Las reservas de 2005 de más de 14 millones de hectáreas de tierras deforestadas se redujeron drásticamente en 2016, pero de 2016 a 2020, con el deterioro del entorno institucional, se añadieron al mercado 2.4 millones de hectáreas de tierras deforestadas (Figura 2-D).

Las reservas especulativas mantuvieron bajo el precio de la tierra desmontada en la región, contribuyendo a garantizar la rentabilidad de la ganadería extensiva, aumentando su competitividad y la competitividad de la producción de cultivos también, posiblemente aumentando sus respectivas demandas de tierra. De hecho, dos componentes del mercado de tierras han sido cada vez más rentables: la expansión de tierras desmontadas (diferencia entre los precios de las tierras con y sin bosque) y la especulación con la tierra (diferencia de los precios de las tierras deforestadas entre diferentes ciclos de producción de materias primas³ (Figura 2).

RECUADRO 1: CAOS DE TIERRAS

La noción de “caos de tierras” se refiere a situaciones en las que coexisten altas probabilidades de ilegalidad en las relaciones de propiedad de la tierra, presumidas por la historia y el contexto, con bajas probabilidades de distinción efectiva entre lo que es legal y legítimo y lo que no lo es³. Esto ocurre porque los organismos estatales de tierras y las organizaciones de la sociedad civil no disponen de medios para combinar la información sobre el origen de la propiedad y la compraventa de tierras. En consecuencia, los organismos estatales no pueden demostrar rápida y razonablemente la cadena de establecimientos de dominio. Las razones de ello pueden ser:

1. La falta de recursos técnicos capaces de hacer frente a la complejidad de la situación; o
2. Aunque existan recursos técnicos, a) no hay recursos financieros suficientes para ponerlos en práctica, o b) el Estado se niega a operacionalizarlos, por falta de voluntad política - porque a través de la correlación de fuerzas que influyen en sus acciones, el Estado se ha vuelto incapaz de controlar la herencia de la tierra por parte de la sociedad para el bien común. Experiencias recientes demuestran que existen recursos técnicos para resolver este problema^{17,18}.

3. LOS MERCADOS DE TIERRAS ESTÁN INTERRELACIONADOS CON OTRAS ACTIVIDADES ILEGALES Y LEGALES, LA VIOLENCIA Y LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS: ACUERDOS INSTITUCIONALES DE LA “COALICIÓN DEL PILLAJE”

El caos de tierras y el mercado de tierras son expresiones de contextos más profundos en los que los fundamentos estructurales de los estados capturados, que actúan bajo la hegemonía de fuerzas económicas específicas, convierten las tierras y los recursos amazónicos en subsidios críticos para las economías nacionales. En Brasil, dadas las tendencias de desindustrialización y la creciente dependencia de la exportación de materias primas para asegurar un crecimiento económico políticamente aceptable, la hegemonía de los intereses agroindustriales y mineros ha profundizado su influencia en la formación y el uso de las capacidades estatales¹⁹⁻²¹. La producción de tierras en la Amazonía es, por tanto, un tema de gran relevancia estratégica, permitiendo la formación de “coaliciones del pillaje”^{11,12,22} para fortalecer sus mecanismos operativos a niveles locales, asumiendo formas de arreglos locales específicos que articulen la esfera institucional con el ámbito de la producción de tierras y bienes⁴.

Los datos de la Policía Federal de Brasil de 2016 a 2020 sobre operaciones para prevenir delitos ambientales en todos los estados de la Amazonía brasileña permiten una visión aproximada de estas relaciones complejas²³ (Tabla 3, p. 23). La Policía Federal atribuyó “hipótesis criminales” (por ejemplo, acaparamiento de tierras, tráfico de drogas, deforestación ilegal, etc.) a 166 de sus operaciones en propiedades rurales en diferentes etapas del proceso de producción y uso de la tierra (Figura 3). Según esta información única, nada menos que el 47% de todas las propiedades investigadas resultaron de acaparamiento de tierras mediado por fraude (45%) y corrupción (34%) (Figura 3-A).

El 60% de las propiedades investigadas sufrieron deforestación ilegal y tala ilegal (22%). Los datos informan además que estos momentos de producción de tierras estuvieron frecuentemente vinculados con otras actividades ilícitas, incluyendo que 16% de las propiedades realizaron algún tipo de blanqueo de dinero, 15% poseían armas ilegales y 14% estaban involucrados en delitos violentos, incluido el tráfico de personas (7%) y la minería ilegal (9%). En consecuencia, el 60% de los casos podrían caracterizarse como transacciones realizadas por organizaciones criminales (Figura 3-A). Desafortunadamente, otras fuentes corroboran que las transacciones de tierras amazónicas están vinculadas a la ilegalidad, la violencia y las violaciones de derechos humanos: casos bien documentados de acaparamiento de tierras han representado apropiaciones por parte de agentes individuales de decenas o incluso cientos de miles de hectáreas²⁴. En 2020, hubo 1,132 conflictos por tierras con 17 muertes, 17 asesinatos, 16 intentos de asesinato y 102 amenazas de muerte contra campesinos, indígenas y sus defensores (FNSP²⁵, Cuadro 3, p. 534.); El 77,8% de los trabajadores encontrados en condiciones de esclavitud en Brasil estaban registrados en la Amazonía, precisamente en los municipios responsables de 88.8% de la deforestación²⁶; y alrededor del 95% de toda la deforestación es ilegal^{19,27}.

Se puede entender la dinámica de la producción de tierras como un ciclo de apropiación territorial y acumulación de riqueza por parte de agentes y grupos económicos²⁸⁻³¹ (que se muestra esquemáticamente en la Figura 3-B). Los recursos ilícitos financian la apropiación de tierras públicas y/o la expropiación de tierras campesinas e indígenas. Estas tierras

obtenidas ilegalmente se transforman en propiedades negociables, con títulos falsos y legales que se vuelven indistinguibles mediante de un mercado basado en el caos de tierras y un control creciente sobre los mecanismos administrativos formales (la elección de representantes ejecutivos y legislativos locales y nacionales o la corrupción de agentes oficiales; Figura 3-B).

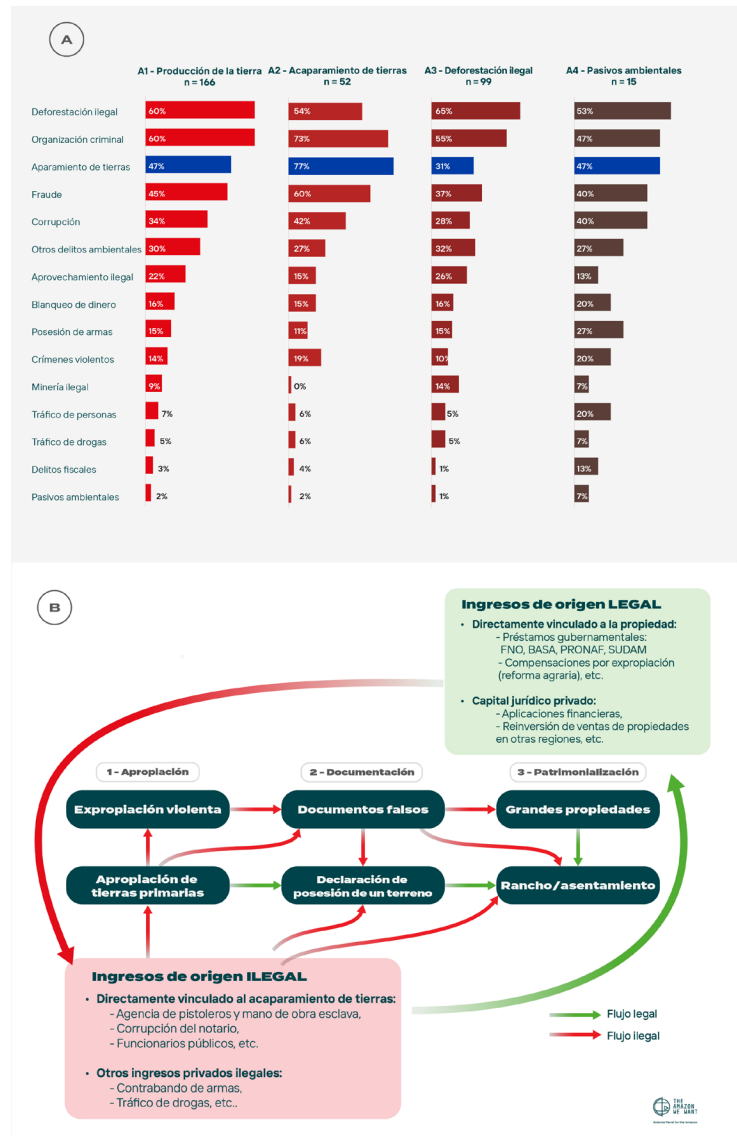


FIGURA 3: Arreglos institucionales locales, mercado de tierras y economías ilícitas. A. Proporción de casos investigados por la Policía Federal de Brasil en sus operaciones para evitar delitos ambientales en la Amazonía Legal entre 2016 y 2020 que estuvieron sujetos a “hipótesis criminales” (líneas) y el total de casos agrupados según temas o enfoques de las operaciones: “operaciones de acaparamiento de tierras” (A2) enfocadas en la supuesta transformación institucional o burocrática ilegítima de tierras públicas en privadas; la “deforestación ilegal” (A3) enfocada en la transformación de tierras boscosas en desmontadas; y “propiedades con déficits ambientales” en relación con los requisitos de uso del suelo y reservas legales (A4). La columna “producción de tierras” (A1) es la situación promedio, considerando las tres estructuras de acuerdo a los totales de casos respectivos. Fuente: Elaboración propia con base en Araújo Santos et al. 2019³².

Puestas en producción, las tierras desmontadas resultantes de tales sistemas ilegítimos permiten un acceso privilegiado a diferentes flujos de ingresos de origen legal. Por ejemplo, las tierras productivas son elegibles para acceder a créditos subsidiados y financiamiento estatal de servicios como la investigación y asistencia técnica e instalaciones de infraestructura, que impactan positivamente la rentabilidad de estas tierras. Las tierras desmontadas puestas en el mercado permiten ganancias legales e ilegales acumulativas y los resultados ampliados de un ciclo posteriormente forman la base de uno nuevo (ver Figura 3-B).

C.COLOMBIA: EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS PERMITE EL BLANQUEO DE DINERO DE ECONOMÍAS ILÍCITAS

Los principales impulsores de la deforestación en la Amazonía colombiana son la ganadería y el acaparamiento de tierras extensivos, los cuales han aumentado recientemente en áreas protegidas³³⁻³⁶. Otros factores que impulsan la deforestación son la minería, la extracción de petróleo, los proyectos de infraestructura y los cultivos ilegales^{34,37-40}. Sin embargo, la deforestación en la Amazonía colombiana no puede entenderse adecuadamente sin centrarse en el modelo económico y las desigualdades sociales que están profundamente entrelazadas con la distribución de la tierra y el conflicto armado interno.

La distribución de la tierra en Colombia es extremadamente desigual. Según datos recientes, el índice de Gini de tenencia de la tierra (la medida más común de desigualdad en la apropiación de la tierra) es 0.89^{5,40-43}. Estas desigualdades son históricamente persistentes y han aumentado como consecuencia del conflicto armado interno mediante el despojo y el desplazamiento forzado. En el pasado, se han frustrado varios intentos de redistribución de la tierra mediante reformas agrarias.

Para analizar los vínculos entre la tierra, las actividades ilícitas, las desigualdades y los procesos actuales de deforestación y pérdida de biodiversidad en la Amazonía, es importante tomar en consideración los principales aspectos de la problemática agrícola en la región: i) el proceso histórico de su colonización; ii) las consecuencias del conflicto armado interno; iii) patrones de desarrollo extractivos y, como en Brasil, el caos de tierras.

i) Proceso de colonización

Aunque la Amazonía representa aproximadamente 43% del territorio nacional, solamente después de la Constitución de 1991 se consideró como una región de protección especial ambiental, se reconoció oficialmente a los pueblos indígenas y se constituyeron cinco de los seis departamentos amazónicos. Antes de eso, el interés en la región residía en la extracción de recursos naturales (especialmente caucho, quinina y madera) y la colonización⁴⁴.

A partir de la década de 1960, el Estado promovió la colonización de la Amazonía a través de concesiones de "terrenos baldíos" a familias campesinas con el objetivo de mitigar la presión por la redistribución de tierras por parte de movimientos campesinos y víctimas de la violencia política en otros territorios⁴⁵. Los programas promovieron patrones de colonización basados en la tala de bosques como forma de demostrar el uso productivo de la tierra, que podía usarse para obtener acceso a crédito y títulos de propiedad⁴³. Debido a esta política, se produjo una continua expansión de la frontera agrícola, deforestación y un rápido aumento del tamaño de la población, junto con cambios en el uso y la cobertura del suelo, de bosques a la agricultura y ganadería⁴⁶. Este proceso tuvo consecuencias negativas de gran alcance para los territorios de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales y sus ecosistemas.

A pesar de esta transformación del bosque y su impacto sobre las poblaciones originarias, los objetivos de desarrollo socioeconómico que promovieron la migración de familias campesinas desde el centro del país hacia la Amazonía no se lograron. Sin embargo, desde la perspectiva de la problemática agrícola que subyace al destino de la Amazonía y considerando las desigualdades en la distribución de la tierra que persisten en Colombia, la política logró mitigar las presiones por la reforma agraria en los lugares de origen de las familias campesinas migratorias. Como resultado, la Amazonía colombiana combina una dramática degradación ambiental con la marginación socioeconómica y una débil presencia estatal⁴⁷ en la provisión de servicios sociales (salud, educación) e infraestructura (carreteras y acceso a mercados)^{48,49}.

ii) Las consecuencias del conflicto armado interno

La larga historia de violencia política en Colombia es un impulsor crucial de la deforestación en la Amazonía y contribuye al caos de tierras⁵⁰. Estos procesos han permanecido desde la época colonial, pero aumentaron significativamente en la segunda mitad del siglo XX. La continua marginación y la débil presencia estatal aumentaron los incentivos para el cultivo ilícito y facilitaron la presencia y legitimidad de actores armados no estatales.

El surgimiento de formas renovadas del conflicto armado en la Amazonía ha resultado en una dinámica circular de desplazamiento forzado – colonización – conflicto armado – desplazamiento forzado⁵¹⁻⁵³. Durante el Proceso de Paz con la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), se hicieron evidentes las consecuencias negativas del conflicto armado interno sobre las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas y sus territorios. En la Amazonía colombiana, especialmente la ganadería extensiva, el extractivismo (minería y extracción de petróleo) y el cultivo de drogas

ilícitas, han estado en el centro del conflicto armado interno y han contribuido a la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua⁵⁴⁻⁵⁶. Recientemente, la naturaleza y los territorios han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado colombiano y algunos ríos y territorios – incluyendo la Amazonía– han sido reconocidos como sujetos de derecho⁵⁷.

Sin embargo, el Proceso de Paz actual con las FARC-EP sufre de la implementación lenta, especialmente con respecto al desarrollo rural y la economía de las drogas⁵⁸. Según datos oficiales, sólo se ha logrado 16% de los objetivos de la restitución de tierras⁵⁹. Además, después de que los Acuerdos de Paz aumentaron rápidamente las tasas de deforestación³⁴, los activistas ambientales sufrieron ataques y algunos incluso fueron asesinados⁶⁰. Sin embargo, el estado ha logrado los objetivos de la reforma rural establecidos en los Acuerdos de Paz que buscan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en zonas rurales de manera sostenible. Como consecuencia, hoy, nuevos y viejos actores armados no estatales ejercen control territorial en las zonas.

ii) Caos de tierras

El caos de tierras en la Amazonía colombiana está relacionado tanto con patrones históricos de ocupación de territorios amazónicos, así como con el acaparamiento de tierras más reciente por parte de los grandes intereses económicos. Las formas no planificadas de colonización, los incentivos para expandir la frontera agrícola para mitigar los conflictos por la tierra y la dinámica circular entre el desplazamiento forzado, la colonización y la violencia han hecho que la titulación de tierras en la Amazonía sea muy precaria. Con pocas excepciones, los catastros están desactualizados o no existen en absoluto⁶¹ y, como resultado, el Estado no tiene información suficiente para tomar acciones, por ejemplo, en la restitución de tierras⁶². Además, ha surgido un fenómeno más moderno en el que las

élites locales y los inversores extranjeros están deforestando grandes extensiones de bosque, seguido por el tráfico ilegal de vida silvestre y la introducción de la ganadería u otras actividades “productivas”. De hecho, el caos de tierras está aumentando en parte debido al blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.

La ganadería, no el cultivo ilícito, es el principal impulsor de la deforestación en la Amazonía colombiana³⁴, pero la economía de las drogas está intrínsecamente vinculada a la deforestación mediante el blanqueo de dinero de importantes rentas ilegales a través de la compra de tierras y la ganadería⁶³. Estas prácticas reproducen economías rentistas que no se centran en la productividad, sino en asegurar el poder político y social a través de la riqueza y estatus. Así, la actividad productiva se emprende para legitimar la riqueza obtenida ilícitamente. Dado que la eficiencia y la productividad no son objetivos principales, las prácticas adoptadas tienden a ejercer más presión sobre la frontera agrícola.

D. VENEZUELA: LA MINERÍA ILEGAL DE ORO POR GRUPOS PARAMILITARES SOCAVA LA DEMOCRACIA

La Amazonía venezolana está experimentando un proceso de degradación acelerada tanto de sus ecosistemas, así como de los diferentes pueblos que la habitan. La biorregión está siendo impactada por la crisis más compleja y profunda que ha atravesado Venezuela en su historia contemporánea, y probablemente una de las peores de América Latina⁶⁴. Entre los diversos factores que están generando esta situación, la minería es el principal y más pernicioso cuando se considera su generación de impactos multidimensionales^{65,66}. Sin embargo, uno de los principales impulsores directos de la deforestación es la expansión de la frontera agrícola para cultivos y ganadería, aunque la tasa ha desacelerado en la

última década⁶⁷. Esta expansión no va acompañada de un aumento de producción, ya que la tierra suele ser abandonada después unos años⁶⁷. Los problemas de acaparamiento de tierras no son comunes en la región, donde las zonas taladas resultan debido a la entrada de mineros a la región⁶⁶. La minería y la agricultura, así como los incendios forestales, aparecen como los principales impulsores de la deforestación cuando se analizan los puntos críticos de deforestación de la Amazonía venezolana, que se concentran principalmente dentro del Arco Minero del Orinoco (un área de más de once millones de hectáreas creada para promover la minería), así como dentro de y alrededor de áreas protegidas⁶⁶.

El desarrollo y la expansión minera en la región son fundamentalmente ilegales debido a tres factores principales. El primero es la presencia, participación y control generalizados de la minería por parte del crimen organizado y actores armados irregulares en toda la Amazonía venezolana. Estos actores pueden ser de origen nacional—como los llamados ‘Sindicatos’,—pero también, dependiendo de la región, representantes de la guerrilla colombiana—Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC^{68,69}—o el crimen organizado brasileño—como expresiones del narcogarimpo en Roraima,⁷⁰—que fortalecen y promueven la minería transfronteriza. Mediante el establecimiento de regímenes de violencia extrema, estos grupos pueden controlar las minas y las rutas de productos ilícitos, y supervisar las cadenas de extracción locales. Los pequeños mineros (que pueden ser locales, de otros estados venezolanos o de países vecinos, como Colombia) y las comunidades indígenas, operan principalmente como fuerza laboral, en condiciones de gran vulnerabilidad. Han surgido varias resistencias territoriales indígenas, aunque también hay minas controladas y gestionadas por grupos indígenas—como por ejemplo en La Paragua⁷¹. Estos regímenes violentos imponen castigos severos e incluso recurren al asesinato para disciplinar a quienes

faltan el respeto a la autoridad criminal o resisten la sobreexplotación laboral, el reclutamiento de niños y jóvenes o los desplazamientos forzados⁷².

La segunda razón, es el carácter eminentemente ilegal de la actividad en una amplia extensión del territorio amazónico, ya que la minería está prohibida en todo el estado Amazonas y en las ABRAE (Áreas bajo Regímenes de Administración Especial, designadas para fines especiales, como conservación o mejoramiento), como Parques Nacionales (PN) o Monumentos Naturales en el estado Bolívar. Sin embargo, la minería ocurre en grandes PN como Caura (7.5 millones de ha) o Canaima (3 millones de ha). Además, en el proceso de extracción se utiliza mercurio, prohibido por decreto desde 2016¹.

La tercera razón de la expansión minera es que algunas actividades mineras de pequeña escala están incluidas dentro del alcance de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y se consideran actividades mineras “formales”; por ejemplo, en el municipio de El Callao. Sin embargo, estas iniciativas operan en secreto, sin que se haga disponible la información de manera pública y además están envueltas en corrupción estatal^{73,74}. Existe una gran opacidad sobre el origen y los métodos de obtención del oro⁶⁹ y la actividad está dominada por redes criminales violentas.

Las zonas de mayor expansión minera en el estado Bolívar son la cuenca del río Cuyuní (límitrofe con el Esequibo), en la zona de Ikabarú, las riberas del Caroní, la parte alta y media Paragua, y en la cuenca del Caura con respecto al oro, coltán y corredores de extracción de diamantes en el municipio Cedeño. En el estado de Amazonas, se destaca la notable expansión en el PN Yapacana; como en

¹ Decreto N° 2.412, del 5 de agosto del 2016, que prohíbe el uso, la posesión, el almacenamiento y el transporte de mercurio (Hg) como método de obtención o tratamiento de oro y cualquier otro mineral metálico o no metálico. Publicado en el Diario Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.960 de la misma fecha.

el territorio Yanomami en el Alto Orinoco, y en ríos como el Ventuari y el Sipapo, por ejemplo.

El gobierno nacional estableció el proyecto Arco Minero del Orinoco como marco de la política minera para la Amazonía. Sin embargo, no ha podido avanzar en emprendimientos mineros de gran escala dadas las complejas y adversas condiciones para la inversión extranjera. Lo que prevalece en prácticamente todos los casos analizados es la participación, asociación y complicidad de funcionarios estatales y fuerzas militares en la minería ilegal—por ejemplo, la facilitación de la adquisición de combustible para barcos, soborno a mineros, permiso de tránsito para insumos mineros y establecimiento de mineros ilegales, etc.⁷⁵⁻⁷⁷. Estas formas cercanas de asociación y operación minera entre actores legales e ilegales han hecho que las fronteras entre ellos sean cada vez más borrosas. Esto también se debe a redes de corrupción estatal que participan en la apropiación e inserción de oro ilícito en las cadenas de valor globales.

La prolongación y estancamiento del conflicto político en Venezuela ha tenido un impacto muy negativo en la región amazónica, al punto que esta situación se enfrenta con altos niveles de impunidad y negligencia gubernamental. La cuestión amazónica recibe poca atención por los sectores opositores en los debates nacionales, y en el ámbito internacional, el tema está ausente en el proceso de negociación liderado por Noruega⁷⁸. Además, las sanciones internacionales a Venezuela han sido acompañadas de impactos negativos en su población, como se ve en el aumento de las tasas de enfermedad y mortalidad y el colapso de los estándares de vida⁷⁹. Aunque los expertos no están de acuerdo sobre el vínculo causal entre esta disminución y las sanciones, esto ha ocurrido sin que se haya materializado ningún efecto claro sobre el puesto de del gobierno actual en el poder ni se hayan logrado soluciones al conflicto político^{79,80}.

E. MINERÍA DE ORO, TRÁFICO DE DROGAS Y DEFORESTACIÓN EN PERÚ Y BOLIVIA

En la última década, se ha producido una expansión dramática de la minería ilegal de oro tanto en Bolivia como en Perú. En Bolivia, el oro se convirtió en el mayor producto de exportación del país, con \$2.55 billones de dólares en 2021⁸¹, lo que representa 6.2% del PIB⁸², mientras que en Perú, el oro es el segundo producto de exportación más grande, con \$7.7 billones de dólares en 2021, alcanzando 14% de las exportaciones totales. En ambos países, la minería de oro ilegal y artesanal representan una gran fracción de la producción y exportaciones totales de oro^{82,83}.

En Perú, la minería ilegal de oro se ha concentrado en el sur de la Amazonía (departamento de Madre de Dios), aunque la actividad también ha proliferado recientemente en otras zonas⁸⁴. En Madre de Dios, la minería ilegal incluye otras actividades ilícitas, como el trabajo infantil, el trabajo forzado y la prostitución. Varias medidas militares lograron sólo un éxito parcial en el control de las ilegalidades⁸³. En Bolivia, la mayor parte de la extracción de oro proviene de pequeños y medianos productores que se benefician de incentivos generosos. La extracción de oro se lleva a cabo incluso dentro del Parque Nacional Madidi en el norte de la Amazonía, a pesar del alto conflicto social con las comunidades indígenas⁸⁵. En ambos casos, la minería de oro genera contaminación masiva de mercurio, afectando principalmente a las comunidades indígenas que dependen de una dieta basada en pescado⁸⁶. Bolivia se convirtió en el mayor importador de mercurio de América Latina y el segundo del mundo, representando 13% de las importaciones mundiales en 2021⁸⁷.

Tanto en Bolivia como en Perú, una fracción de la producción de coca es producida legalmente

y consumida localmente por las culturas tradicionales como un producto no procesado. En Perú, el cultivo de coca casi se ha duplicado entre 2015 y 2021⁶, expandiéndose a nuevas zonas, principalmente en el centro y sur, además de la zona tradicional del Alto Huallaga, ubicada en el centro oeste de la Amazonía peruana. Las bandas de narcotraficantes intentan controlar grandes territorios y los enfrentamientos armados con los militares son recurrentes. Las hojas de coca requieren un proceso químico para producir cocaína, lo cual se hace en parte en Perú, pero la mayor parte se envía a Bolivia para ser refinada y exportada⁸⁴. En Bolivia, en contraste, las zonas de cultivo de coca no cambiaron significativamente en la última década, aunque los vínculos de exportación se volvieron más diversificados y fuertes⁸³.

Aunque la pérdida de bosques primarios aumentó tanto en Perú y en Bolivia, el deterioro en Bolivia fue más fuerte. A pesar de su retórica ambiental, Bolivia tuvo la mayor pérdida acumulada de bosques primarios entre los países amazónicos entre 2001 y 2022 (9.1%), superando incluso a Brasil. La deforestación aumentó dramáticamente entre 2015 y 2022, y la pérdida de cobertura primaria se cuadruplicó¹. La nueva legislación⁸⁸ promovió la expansión de la soja y ganadería para la exportación con control mínimo. A medida que el cultivo de soja conduce al agotamiento de los nutrientes del suelo, nuevas tierras desmontadas están reemplazando zonas de cultivo antiguas y agotadas en una senda de deforestación cada vez mayor. Además, la expansión agrícola ha desplazado las tierras de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, como en el caso de Laguna Concepción⁸⁹.

La conversión de tierras a propiedades pequeñas y medianas, es la forma dominante de deforestación tanto en Perú como en Ecuador. Como resultado, los mercados ilegales de tierras de grandes propiedades no son la forma

predominante de apropiación de tierras, como en Brasil y Colombia. Sin embargo, se han ampliado grandes plantaciones de palma aceitera y cacao recientemente⁸⁴.

Las actividades ilegales se expandieron en Perú en un contexto de débil presencia estatal, tanto a nivel nacional como local, y falta de transparencia, recursos y capacidad de los gobiernos locales para implementar la aplicación de la ley. La mayoría de las actividades ilegales permanecen impunes. Además, 90% de las tierras con propietarios en la región carecen de título formal⁹⁰, generando conflictos por la tierra y haciendo cada vez más difícil el reconocimiento de las tierras indígenas, particularmente en conflictos con concesiones mineras⁸³. En contraste, Bolivia implementó un proceso de reconocimiento legal de tierras indígenas en la Amazonía en la década de 1990, reforzado en la década siguiente. Sin embargo, después de 10 años de regulación de la titulación de tierras en el país, sólo 6% de las tierras sujetas a regulación tenían títulos⁹¹. No obstante, parece que se han logrado algunos avances recientes.

F. CONCLUSIÓN

Durante la última década, en un contexto de débil presencia estatal, deterioro de la democracia y creciente deforestación en la Amazonía, proliferaron el apropiamiento de tierras y los mercados ilegales de tierras, especialmente en Brasil y Colombia, consolidando la ya elevada concentración de la tierra y la desigualdad. Diversas formas de otras actividades ilícitas, en particular el tráfico de cocaína, el blanqueo de dinero y la extracción ilegal de oro, experimentaron un aumento drástico en varios países amazónicos, como Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, con los consiguientes efectos de violencia y degradación tanto social como medioambiental.

Las actividades ilegales y legales se difuminan con frecuencia en complejas transacciones y cadenas de productividad, y en general prevalece la impunidad.

Es necesario dotar a los gobiernos nacionales y locales, a la sociedad civil y a las comunidades indígenas, de herramientas informativas sobre las cadenas de propiedad de la tierra y de rastreabilidad de los flujos de producción y comercio, para diferenciar entre actividades legales e ilegales, evitar el blanqueo de dinero y controlar o eliminar estas últimas.

Dado que el enfoque convencional de combatir el narcotráfico erradicando por la fuerza la producción de coca y cocaína no ha logrado controlar el problema, a pesar de su alto costo en vidas humanas, se recomienda explorar un paradigma diferente, que incluya la reducción de la demanda internacional o la legalización del consumo en los países desarrollados.

RECONOCIMIENTOS

Los autores agradecen a quienes han contribuido a la elaboración de este informe. Esto incluye la opinión experta de: Tatiana Roa, Massimo De Marchi, Rodrigo Botero García, Paulo Moutinho, Mariana Varese, Marielos Peña-Claros, Carlos Nobre, y el colaborador de la Consulta Pública, Camilo Torres Sánchez. Agradecemos también a la Secretaría Técnica del SPA, en particular a Julia Arieira y Gabriel Sperandeo. Traducido del inglés al portugués por Diego Brandão y al español por Gabriela Arnal, Julie Topf y Federico Ernesto Viscarra Riveros.

REFERENCIAS

1. Global Forest Watch. Interactive World Forest Map & Tree. Global Forest Watch <https://www.globalforestwatch.org/map/?map=eyJjZW50ZXliOmsibGF0IjoxNi44NDM2Mzk4NjI2MTE1NSwibG5nljotMTA4LjgzNjQ3Nzk5MjEzNDAOfXO%3D> (2023).
2. Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. RAISG. Amazonia Under Pressure. Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. RAISG 1–42 <https://raisg.org/en/publication/amazonia-under-pressure-2020/> (2020).
3. Costa, F. de A. From the appropriation of public lands to the dynamics of deforestation: the formation of the land market in the Amazon (1970–2017). *Nova Economia* 33, 305–333 (2023).
4. Araújo, R. & Vieira, I. C. G. Deforestation and the ideologies of the frontier expansion: the case of criticism of the Brazilian Amazon monitoring program. *Sustainability in Debate* 10, 354–378 (2019).
5. Mora, D. A. Concentración de la tierra y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) en los Montes de María, María La Baja y Carmen de Bolívar. *Prolegómenos* 23, 51–70 (2020).
6. UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime. Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022. United Nations Office on Drugs and Crime [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/INFORME_MONITOREO_DE_TERRITORIOS_CON_PRESENCIA_DE_CULTIVOS_DE_COCA_2022.pdf](https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/INFORME_MONITOREO_DE_TERRITORIOS_CON_PRESENCIA_DE_CULTIVOS_DE_COCA_2022.pdf) (2023).
7. University of Würzburg. Ranking the Quality of Democracy. University of Würzburg 1–18 (2023) [doi:10.1177/0192512121995686](https://doi.org/10.1177/0192512121995686).
8. Ane Alencar et al. Amazon on Fire 7: deforestation and fire in undesignated public forests - IPAM Amazônia. IPAM Amazônia 1–12 (2021).
9. UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2023. United Nations Office on Drugs and Crime <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html> (2023).
10. Collins, D. Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio assassinated. *The Guardian* <https://www.theguardian.com/world/2023/aug/10/ecuador-presidential-candidate-fernando-villavicencio-killed> (2023).
11. Bursztyn, M. O País das Alianças: elites e continuísmo no Brasil. (1990).
12. Bursztyn, M. Ser ou não ser: eis a questão do Estado brasileiro. *Revista do Serviço Público* 45, 27–36 (1994).
13. Costa, F. de A. et al. Chapter 15: Complex, diverse, and changing agribusiness and livelihood systems in the Amazon. in *Amazon Assessment Report 2021* (UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2021). [doi:10.55161/CGAP7652](https://doi.org/10.55161/CGAP7652).
14. Lapola, D. M. et al. The drivers and impacts of Amazon forest degradation. *Science* (1979) 379, (2023).
15. Albert, J. S. et al. Human impacts outpace natural processes in the Amazon. *Science* (1979) 379, (2023).
16. IBGE. Sidra: Banco de Tabelas Estatísticas. IBGE <https://sidra.ibge.gov.br/home/ipca/brasil> (2023).
17. Fioravanti, C. As terras imaginárias do Pará. São Paulo, *Revista Pesquisa Fapesp*, Ed. n. 279. <https://revistapesquisa.fapesp.br/as-terras-imaginarias-do-para/> (2022).
18. Treccani, G. D., Monteiro, A. N. G., Ferreira, D. S., Brito, B. & Gomes, P. Combate à Grilagem de Terras em Cartórios no Pará: Uma Década de Avanços e Desafios. *Amazônia 2030* [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Combate-a-grilagem-de-terras-em-cartorios-no-Para-Uma-decada-de-avancos-e-desafios.pdf](https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2023/02/Combate-a-grilagem-de-terras-em-cartorios-no-Para-Uma-decada-de-avancos-e-desafios.pdf) (2023).
19. Rajão, R. et al. Desmatamento ilegal na Amazônia e no Matopiba: falta transparência e acesso à informação. *Science* (1979) 369, 246–248 (2020).
20. Westra, R. & Seisdedos, P. O. The political economy of emerging markets: Varieties of BRICS in the age of global crises and austerity. *The Political Economy of Emerging Markets: Varieties of BRICS in the Age of Global Crises and Austerity* 1–223 (2017) [doi:10.4324/9781317309185](https://doi.org/10.4324/9781317309185).
21. Cypher, J. M. Emerging Contradictions of Brazil's Neo-Developmentalism: Precarious Growth, Redistribution, and Deindustrialization. *J Econ Issues* 49, 617–648 (2015).

22. Ferraz Da Fonseca, I. et al. A Desconstrução organizada da política florestal no Brasil : estratégias de desmantelamento e de resistência. <http://www.ipea.gov.br> 125–155 (2023) doi:10.38116/978-65-5635-049-3/CAPITULO5.
23. Trajber Waisbich, L., Risso, M., Husek, T. & Brasil, L. O Ecossistema do Crime Ambiental na Amazônia: uma análise das economias ilícitas da floresta. INSTITUTO IGARAPÉ (2022).
24. Allan de Abreu. Altino Masson, MASSON, O MAIOR GRILEIRO DA AMAZÔNIA. Revista Piauí 1–19 (2023).
25. FNSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cartografias das violências na região amazônica: Relatório Final. https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/cartografias-das-violencias-na-regiao-amazonica/ (2022).
26. Sakamoto, L. Trabalho escravo no Brasil do século XXI. Organização Internacional do Trabalho (2006).
27. Valdiones, A. P. et al. Desmatamento Ilegal na Amazônia e no Matopiba: falta transparência e acesso à informação. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icv.org.br/website/wp-content/uploads/2021/05/icv-relatorio-f.pdf (2021).
28. José Heder Benatti, Roberto Araújo Santos & Antônia Socorro Pena da Gama. A Grilagem de terras públicas na Amazônia brasileira. IPAM Amazônia 104 (2006).
29. Fernandes, M. Donos de Terras - Trajetórias da União Democrática Ruralista. Núcleo de Altos Estudos Amazônicos <https://www.naea.ufpa.br/index.php/livros-publicacoes/231-donos-de-terras-trajetorias-da-uniao-democratica-ruralista> (1999).
30. Da Costa, G. Sojicultura e Mercado de Terras na Amazônia. Revista de Políticas Públicas 19, 173 (2016).
31. Santos, R. A. The drug trade, the black economy, and society in western Amazonia. *Int Soc Sci J* 53, 451–457 (2001).
32. Araújo-Santos, I. et al. Seed rain in cocoa agroforests is induced by effects of forest loss on frugivorous birds and management intensity. *Agric Ecosyst Environ* 313, 107380 (2021).
33. Botero, R. Deforestación, acaparamiento y ganadería en la Amazonía colombiana. *Razon Publica* <https://razonpublica.com/deforestacion-acaparamiento-ganaderia-la-amazonia-colombiana/> (2020).
34. Larrea-Alcázara, D. M. et al. Economic drivers in the Amazon after European Colonization from the Nineteenth Century to the Middle of the Twentieth Century (the 1970s) in Amazon Assessment Report 2021 (eds. Nobre, C. et al.) (United Nations Sustainable Development Solutions Network, 2021).
35. Gómez Zúñiga, S. La tierra: conflicto socioambiental y políticas nacionales en la Amazonía. Centro de Alternativas al Desarrollo <https://www.cealdes.co/2020/03/10/hola-mundo/> (2022).
36. Murillo-Sandoval, P. J. et al. The post-conflict expansion of coca farming and illicit cattle ranching in Colombia. *Scientific Reports* 2023 13:1 13, 1–10 (2023).
37. AGENCIA UNAL. La Amazonia está atrapada entre el conflicto armado, la ganadería y la minería. AGENCIA UNAL 1-1 (2023).
38. Insight Crime. La minería ilegal en la Amazonía colombiana. Insight Crime <https://insightcrime.org/es/investigaciones/mineria-ilegal-amazonia-colombiana/> (2021).
39. Sanabria Cuervo, P. El peso de la coca en la deforestación amazónica - CODS. Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina <https://cods.uniandes.edu.co/el-peso-de-la-coca-en-la-deforestacion-amazonica/> (2021).
40. Sanabria Cuervo, P. Minería, una amenaza latente para la Amazonia. Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina <https://cods.uniandes.edu.co/mineria-una-amenaza-latente-para-la-amazonia/> (2021).
41. OXFAM. Radiografía de la desigualdad: lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia. OXFAM chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf (2017).
42. PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. SÍNTESE Relatório do Desenvolvimento Humano 2011 Sustentabilidade e equidade: Um futuro melhor para todos. (2011).
43. Montaña, D. F. POLÍTICAS AGRARIAS Y SUS RELACIONES CON EL NARCOTRÁFICO. 60 Años bajo el signo de la prohibición 387–420 (2022) doi:10.2307/J.CTV2SVJSPM.12.

44. Etter, A., McAlpine, C. & Possingham, H. Historical patterns and drivers of landscape change in Colombia since 1500: A regionalized spatial approach. *Annals of the Association of American Geographers* 98, 2–23 (2008).
45. Martínez Basallo, S. P. Más allá de la gubernamentalidad: políticas de colonización y desarrollo rural en el piedemonte caqueteño (1960–1980). *Universitas Humanística* 82, (2016).
46. Magdalena Castellanos. La colonización dirigida en el piedemonte caqueteño: el 'endeude' y la transformación del paisaje natural. *Academia de historia del caqueta* (2012).
47. Palacio, G. A. & Urueña, M. T. Conflicto armado en la Amazonia: antecedentes, inepción y propuesta analítica. in *El posacuerdo en Colombia - Procesos situacionales temporalidad, territorio y materialidad* (eds. Baquero-Melo, J., Müller, F., Rauchecker, M. & Segura, R.) 77–128 (2022).
48. Valencia, A. Caquetá : violencia y conflicto social. Amazonía y Orinoquía <https://biblioteca.icanh.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56890> (1998).
49. Gootenberg, P. & Dávalos, L. M. The Origins of Cocaine: Colonization and Failed Development in the Amazon Andes. *The Origins of Cocaine: Colonization and Failed Development in the Amazon Andes* 1–178 (2018) doi:10.4324/9780429489389.
50. Vanegas-Cubillos, M. et al. Forest cover changes and public policy: A literature review for post-conflict Colombia. *Land use policy* 114, 105981 (2022).
51. Fajardo Montaña, D. El desplazamiento forzado: una lectura desde la Economía Política. *Espacio Crítico - Centro de estudios* (2007).
52. Centro Nacional de Memoria Histórica. Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/](https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/) <https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/petroleo-coca-despojo-territorial.pdf> (2015).
53. Salgado Ruiz, H. El campesinado de la Amazonia colombiana: una historia menosprecio institucional, constitución identitaria y lucha por el reconocimiento. *Novos Cadernos NAEA* 12, (2009).
54. Rodríguez Garavito, C., Rodríguez Franco, D. & Durán Crane, H. La paz ambiental: retos y propuestas para el posacuerdo. *Desjusticia* (2017).
55. Comisión de la Verdad CEV. *Sufrir la guerra y rehacer la vida*. Comisión de la Verdad CEV (2022).
56. Comisión de la Verdad CEV. *La naturaleza: una víctima silenciosa del conflicto armado*. Comisión de la Verdad CEV (2019).
57. Nathalia Bautista Pizarro & Juliette Vargas Trujillo. *Naturaleza como víctima*. *El Espectador* 1 (2021).
58. Quinn, L. & Vásquez, M. G. Implementation of the Colombian Peace Accord Reaches its Sixth. Year Peace Accords Matrix Policy Brief No. 16. Kroc Institute for International Peace Studies <https://curate.nd.edu/show/6395w666821> (2023) doi:10.7274/6395W666821.
59. Procuraduría General de la Nación. Cuarto Informe al Congreso sobre el Estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz. Informe Seguimiento al Acuerdo de Paz_Radicación (2022).
60. Calle, H. & Mogollón, P. A su memoria: los 65 líderes ambientales asesinados en 2020 en Colombia. *El Espectador* <https://www.elespectador.com/ambiente/en-memoria-de-quienes-defienden-el-ambiente-en-colombia-y-fueron-asesinados/> (2021).
61. CONPES. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 3958. Estrategia para la Implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito. (2019).
62. Alzate, D. J. G., Peñafiel, F. C. R. & Binag, C. A. Polypyrrole on pineapple (Ananas comosus) and water hyacinth (Eichhornia crassipes) polyester blended textiles as promising electrode materials for supercapacitor applications. *Mater Chem Phys* 279, 125774 (2022).
63. Nazih Richani. Colombia: Predatory State and Rentier Political Economy. *Labour, Capital & Society* 43, 119–141 (2011).
64. Puente, J. M. & Rodríguez, J. A. Venezuela en etapa de colapso macroeconómico: un análisis histórico y comparativo. *América Latina Hoy* 85, 55–72 (2020).

65. ORPIA et al. Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. ORPIA chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://watanibasocioambiental.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe-situacion-Amazonia-Venezuela.-AMPA-2020.pdf (2020).
66. MAAP. Hotspots de Deforestación en la Amazonía Venezolana. MAAP <https://www.maaproject.org/2022/deforestacion-venezuela/> (2021).
67. Lazo, R., Valero, E. & Amilibia, J. Cobertura y uso de la tierra en la Amazonía venezolana ¿Cuáles son los impulsores del cambio? Provita chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.provita.org.ve/wp-content/uploads/2022/09/Provita_Cobertura-y-uso-de-la-tierra-en-la-Amazonia-venezolana-2000-2020.pdf (2021).
68. Crisis Group. A Glut of Arms: Curbing the Threat to Venezuela from Violent Groups. Crisis Group <https://www.crisis-group.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/78-glut-arms-curbing-threat-venezuela-violent-groups> (2020).
69. OCDE. Flujos de oro desde Venezuela. OCDE chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mneguidelines.oecd.org/flujos-de-oro-desde-Venezuela-apoyo-a-la-diligencia-debida-en-la-produccion-y-comercio-de-oro.pdf (2021).
70. Viana, F., Cecci, L., Carraro, M. & Consoli, P. O narcogarimpo em números: como o crime organizado atua nas Terras Yanomami - Revista Esquinas. Esquinas (2023).
71. Mosonyi, E. El Pueblo Indígena Pemón, víctima propiciatoria de especulaciones geopolíticas. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos <https://provea.org/publicaciones/investigaciones/esteban-emilio-mosonyi-el-pueblo-indigena-pemon-victima-propiciatoria-de-especulaciones-geopoliticas/> (2020).
72. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. ONU (2022).
73. Transparencia Venezuela. Economías ilícitas en Venezuela. Transparencia Venezuela chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transparencia.org.ve/economias-ilicitas/wp-content/uploads/2022/06/ECONOMIAS-ILICITAS-EN-VENEZUELAcapitulo1.pdf (2022).
74. Lisseth Boon, María Ramírez & Lorena Meléndez. El Arco Minero: La corporación de la molienda. Alianza <https://alianza.shorthandstories.com/Arco-minero-corporacion-molienda/index.html> (2022).
75. Transparencia Venezuela. La Sangrienta Fiebre del Oro. Transparencia Venezuela chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2018/11/EPE-II-Sector-Mineria_AF.pdf (2018).
76. Correo del Orinoco. Desarticulado un grupo de delincuencia organizada por desviar gasolina a minería ilegal. Correo del Orinoco <http://www.correodelorinoco.gob.ve/desarticulado-un-grupo-de-delincuencia-organizada-por-desviar-gasolina-a-mineria-ilegal/> (2022).
77. Silverio, Y. Detienen en Bolívar a militares que permitían el tráfico de combustible y minería ilegal. Crónica Uno <https://cronica.uno/detienen-en-bolivar-a-militares-que-permitian-el-trafico-de-combustible-y-mineria-ilegal/> (2020).
78. Government of Norway. The Venezuelan Negotiation Process. Government of Norway (2023).
79. CFR. Council on Foreign Relations. Do U.S. Sanctions on Venezuela Work? | Council on Foreign Relations. by Diana Roy.
80. Bahar, D., Bustos, S., Morales-Arilla, J. & Santos, M. Impact of the 2017 Sanctions on Venezuela: Revisiting the Evidence. SSRN Electronic Journal (2021) doi:10.2139/SSRN.3809344.
81. The Observatory of Economic Complexity OEC. Gold Mining in Bolivia. The Observatory of Economic Complexity OEC <https://oec.world/en/profile/country/bol> (2021).
82. Graham, T. Bolivian gold miners push into national park despite country's green rhetoric. The Guardian <https://www.theguardian.com/world/2022/oct/19/bolivia-gold-miners-amazon-madidi> (2022).
83. Bandura, R. & McKeown, S. Sustainable Infrastructure in the Amazon. CSIS chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/201022_Bandura_Sustainable%20Infrastructure_Amazon.pdf (2020).
84. Larrea, C. Interview with Eduardo Pichilingue. (2023).

85. Molina, F. Violentas protestas de los mineros del oro para entrar en las áreas protegidas de Bolivia. El País <https://elpais.com/america/2023-11-08/violentas-protestas-de-los-mineros-del-oro-para-entrar-en-las-areas-protegidas-de-bolivia.html> (2023).

86. Karita, J. La fiebre del oro en Bolivia tiene un alto costo para la población indígena | Internacional | EL PAÍS. El País <https://elpais.com/internacional/2023-10-15/la-fiebre-del-oro-en-bolivia-tiene-un-alto-costo-para-la-poblacion-indigena.html> (2023).

87. The Observatory of Economic Complexity OEC. Mercury in Bolivia. The Observatory of Economic Complexity OEC <https://oec.world/en/profile/bilateral-product/mercury/reporter/bol> (2023).

88. Asamblea Legislativa Plurinacional. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Estado Plurinacional de Bolivia 1–2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/4_I_786_0.pdf (2016).

89. Colque, G. Deforestación 2016–2021. El pragmatismo irresponsable de la “Agenda Patriótica 2025”. Tierra chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ftierra.org/index.php/publicacion/documentos-de-trabajo/attachment/237/52 (2022).

90. Interamerican Development Bank. Peru to improve rural land registration and titling with an IDB loan. Interamerican Development Bank <https://www.iadb.org/en/news/peru-improve-rural-land-registration-and-titling-idb-loan> (2014).

91. USAID from the American people. Bolivia Land Titling Program. United States Agency for International Development USAID <https://www.land-links.org/project/bolivia-land-titling-program/> (2011).

AFILIACIONES DE LOS AUTORES

Francisco de Assis Costa: Federal University of Pará, R. Augusto Corrêa, 01 - Guamá, Belém - PA, 66075-110, Brazil

Carlos Larrea: Carlos Larrea. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Toledo N22-80, Quito

Roberto Araújo: Museu Paraense Emílio Goeldi, Av. Gov Magalhães Barata, 376 - São Braz, Belém - PA, 66040-170, Brazil

José Heder Benatti: Federal University of Pará, R. Augusto Corrêa, 01 - Guamá, Belém - PA, 66075-110, Brazil

Vanesa Giraldo, Instituto CAPAZ, Carrera 8 # 7-21. Claustro de San Agustín. Bogotá, Colombia

Susanna Hecht: Luskin School of Public Affairs and Institute of the Environment and Sustainability, 337 Charles Young Drive. University of California, Los Angeles, 90095; and Department of International History and Politics, Graduate Institute, Chemin Eugene-Rigot 2, Geneva, Switzerland, 1211

Maria Rosa Murmis: Universidad Andina Simón Bolívar, XPHM+QHW, Sucre, Bolivia

Stefan Peters: Justus-Liebig-Universität Giessen, Licher Str. 76, 35394 Gießen, Germany; and Instituto CAPAZ, Carrera 8 # 7-21. Claustro de San Agustín. Bogotá, Colombia

Marianne Schmink, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA

Emiliano Terán: Universitat Autònoma de Barcelona, Plaça Cívica, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain

Jeronimo Treccani: Federal University of Pará, R. Augusto Corrêa, 01 - Guamá, Belém - PA, 66075-110, Brazil

MÁS INFORMACIÓN EN
laamazoniaquequeremos.org

SÍGANOS
  [theamazonwewant](https://www.instagram.com/theamazonwewant)

CONTACTO
Secretaría Científico-Técnica del SPA en NY

475 Riverside Drive | Suite 530

New York NY 10115 USA

+1 (212) 870-3920 | spa@unsdsn.org